

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS: CONTENIDO Y ALCANCE

1

Artículo de investigación elaborado bajo tutoría académica
para promocionar al Segundo año de los Estudios de Doctorado

Autora

MSc. Olga Margine Calderón Marengo

Tutora Académica

Profa. Dra. María Asunción Moreno Castillo

Managua, Noviembre 2011

Resumen

La investigación se centra en el contenido y alcance que tiene el derecho a la libertad de expresión en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, a través de la jurisprudencia emitida por la Corte, se hace énfasis en la trascendencia que tiene el respeto a este derecho como piedra angular en la construcción de las democracias de los países latinoamericanos, a través de la defensa de los dos pilares fundamentales de la democracia, como son el derecho a expresarse libremente y el derecho de recibir información.

Abstract

The research focuses on the content and scope that has the right to freedom of expression in the Inter-American System of Human Rights, through the jurisprudence of the Court, it emphasizes the importance that respect for this right as the cornerstone in building democracies in Latin American countries, through respect of the two pillars of democracy such as the right to free speech and the right to receive information.

Palabras claves: Libertad de expresión, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Jurisprudencia, Estado social de Derecho, Democracia.

Key words: Freedom of Expression, Inter-American Court of Human Rights, Jurisprudence and Social State of Law, Democracy.

SUMARIO: Introducción. I. Libertad de expresión como presupuesto de la democracia
1. La libertad de expresión como un derecho fundamental, en el Estado social de Derecho 1.1. *Principales rasgos del derecho a la libertad de expresión* 1.1.1. Sujetos responsables del derecho a la libertad de expresión 1.1.2. La doble dimensión del derecho a la libertad de expresión 1.1.2.1 Dimensión individual 1.1.2.2. Dimensión colectiva 1.2. *Libertades fundamentales claramente vinculadas a la libertad de expresión* 1.2.1. Libertades individuales o físicas 1.2.2. Libertades espirituales 1.2.3. Libertades sociales 1.2.3.1. Libertad de trabajo 1.2.3.2. Libertad de reunión 1.3. *Principales tipos de expresión* **2. Sistema normativo de la libertad de expresión en el sistema interamericano** 2.1 *Convención Americana sobre Derechos Humanos* 2.2. *Declaración American de los Derechos y Deberes del Hombre* 2.3. *Carta Democrática Interamericana* **3. La jurisprudencia en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referidas al derecho de la libertad de expresión** 3.1. *Alcances de las sentencias de la CIDH referidas a la violación al derecho a la libertad de expresión.* 3.2. *Coherencia jurisprudencial en los casos contenciosos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión.* **II. Conclusiones III. Referencias Bibliográficas.**

Introducción

El presente trabajo de investigación contiene el análisis realizado a cada una de las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado en referencia a la violación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en lo referido a la libertad de pensamiento y de expresión, asimismo se analizan los aspectos doctrinarios referidos a las concepciones y consecuencias que conlleva la violación de este derecho.

El tema analizado es de trascendental importancia, como presupuesto esencial para la consolidación de una sociedad democrática en los países de América Latina, y como derecho fundamental en el Estado social de Derecho, así pues el estudio del derecho a la libertad de expresión, no puede partir de la reflexión de que es uno más de los varios derechos fundamentales reconocidos en los textos constitucionales. Es por ello que en esta investigación se analizan las teorías que se han elaborado respecto a sus fundamentos, de modo tal que puedan comprenderse las razones por las que, ante un conflicto con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos, la sentencia que se adopte deberá estar orientada por la importancia de la protección de este derecho en un Estado constitucional.

Se analizan los principales rasgos, dimensiones y tipos de la libertad de expresión, así como el ámbito normativo de este derecho en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se exponen los principales resultados encontrados a la luz del análisis de las sentencias que la CIDH ha dictado en referencia al tema de estudio, haciéndose énfasis en la importancia que tiene el respeto a este derecho así como los límites, la prevalencia del orden público, la participación

política, la exigibilidad del derecho de rectificación y respuesta, son los temas de coincidencia en el análisis jurisprudencial realizado.

La relevancia científica- académica de esta investigación encontrará su fundamentación teórica en el análisis de la doctrina más autorizada que se ha cuestionado la naturaleza absoluta de los derechos fundamentales, de esta manera se estudian las medidas que se pueden adoptar para justificar su protección, así como las dimensiones jurídico-constitucionales de los límites al ejercicio de la libertad de expresión establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua.

Se desarrolla un trabajo investigativo de forma analítica y descriptiva que metodológicamente se centra en el alcance y contenido que tiene el derecho a la libertad de expresión.

Aun existiendo una variedad de pronunciamientos en materia de protección del derecho a la libertad de expresión, adoptadas por la Corte Interamericana, su avance jurisprudencial, todavía no ha sido completamente desarrollado ya que todavía quedan cuestiones o problemáticas aun sin ampliar, esto demuestra que sólo es posible identificar tendencias jurisprudenciales, si se cuenta con un importante conjunto de controversias sobre un derecho fundamental.

La presente investigación es un esfuerzo oportuno para la difusión de la jurisprudencia, de la Corte, en Nicaragua y para que esta pueda tener alguna repercusión frente a la regulación constitucional, la investigación se establece sobre la base de los preceptos constitucionales nicaragüenses.

I. Libertad de expresión como presupuesto para la democracia

1. La libertad de expresión como un derecho fundamental en el Estado social de Derecho

Al hablar del Estado social de Derecho, primeramente es necesario hacer mención de los elementos y exigencias esenciales que le han caracterizado, para posteriormente introducirnos al análisis del derecho a la libertad de expresión como una condición esencial para la democracia.

Al referirnos a la características de un Estado social de Derecho de forma general es preciso hablar, según Díaz (1998) del imperio de la ley, formalizada como tal en un órgano popular representativo, hablar de la misma forma de la separación y distribución de poderes, legalidad de la administración y garantía de los derechos y libertades fundamentales, el tema que nos ocupa

para nuestro análisis son los llamados derechos fundamentales, considerados como inalienables y anteriores al Estado, conformados desde su nacimiento como una barrera robusta frente a las arbitrariedades del poder, siendo la libertad, la igualdad y la seguridad del individuo, las ideas básicas para la construcción de tales derechos.

Podemos definir o entender a estos derechos como las facultades que satisfacen nuestras necesidades de libertad, igualdad y seguridad, reconocidas todas ellas en un Estado social de Derecho, asimismo también se puede afirmar que los deberes son los límites a los derechos, el estar obligados a hacer algo que la norma establece, mientras que las garantías serían las enmiendas jurídicas para restablecer el goce de un derecho transgredido.

García (2007) señala que una tarea grande en el mundo, es el limitar al poder, hacerlo responsable, arbitrar medidas que permitan su control, y a partir de esto es necesario que la fiscalización se realice desde la ley, esta debería de ser una exigencia para todo Estado social de Derecho.

En línea de lo anterior podemos afirmar que la democracia es necesaria para la buena marcha de los derechos, ya que resulta que la libertad de expresión, es un derecho humano que si se pierde, pone en peligro la vigencia de todos los demás valores y principios imperantes en una sociedad democrática Bertoni (2008). Consecuentemente, la protección del derecho a expresar las ideas libremente es fundamental para la plena vigencia del resto de los derechos humanos, siendo la libertad de expresión el núcleo de una sociedad democrática.

Ejemplo de ello es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual inicia proclamando “Que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”, y en su artículo 4 se expresa que la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. A partir de lo antes mencionado, se puede desprender que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, sino que tiene sus límites en la libertad de los demás, límites que según el mismo artículo no pueden ser determinados sino por la Ley. El artículo 5, complementa este principio al decir que todo aquello que no esté prohibido por la Ley no puede ser impedido.

Ahora bien la libertad puede ejercerse en distintas direcciones, siempre en busca de la realización integral del ser humano y de su legítimo desarrollo dentro de la sociedad.

Este derecho comprende varias categorías, entre las que podemos encontrar las libertades civiles, económicas y de pensamiento, y las llamadas libertades-oposición que son aquellas que

establecen un freno y garantizan al individuo los derechos de discusión y de participación. A ellos pertenecen los llamados derechos políticos, las libertades de prensa, de reunión y de asociación.

Otra característica en un Estado social de Derecho, la encontramos en la división de poderes. Montesquieu afirmaba, que la única manera de controlar al poder era con otro poder de igual dimensión y naturaleza: "Solo el poder detiene al poder" y por tanto afirmaba que el poder del Estado tiene que dividirse en tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, el artículo 129 de la Constitución Política de Nicaragua, establece un cuarto poder, el electoral y añade que además deben controlarse, coordinarse y estar subordinados únicamente a los interés supremos de la nación.

De igual forma caracteriza a un Estado social de Derecho, la autoridad de la ley, este principio se constituyó como oposición al principio absolutista que establecía que los actos del rey o soberano no están limitados por las leyes. Según esto todo acto estatal debe ser un acto jurídico que derive su fuerza de la ley aprobada por el Poder Legislativo, que es la institución a través de la cual se manifiesta de forma más acabada la voluntad popular. La ley, en la famosa expresión de Rosseau, es la expresión de la voluntad general.

Ahora bien en palabras de Huerta (2003) podemos señalar que en varios países de la región, la libertad de expresión ha sido reconocida como un derecho fundamental desde los primeros textos constitucionales hasta la actualidad. Esto ha originado consecuencias jurídicas, pues todo análisis relacionado con su ejercicio deberá necesariamente tomar en consideración la existencia de otros derechos fundamentales y bienes que también gozan de protección constitucional, con los que puede entrar en conflicto pero con los que también debe ser armonizado.

El derecho a la libertad de expresión, es la punta de lanza para la sociedad democrática, siendo este derecho importante para la vida en democracia, así lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos haciendo referencia a la opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1983, emitida por esta donde se señala que:

“La libertad de expresión es una piedra angular para la democracia, es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también condición sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y en general quienes deseen influir sobre la colectividad puedan

desarrollarse plenamente, señalando que una sociedad si no está bien informada no es plenamente libre”. (Corte I.D.H. *Caso Herrera Ulloa*).

Por lo tanto es imprescindible para un Estado social de Derecho el respeto al ejercicio, el debate, la mayor circulación posible de la información y opiniones y el respeto de los disensos, esto como expresión fundamental de la democracia.

Según Olascaga (2009) la palabra libertad designa a la facultad que el ser humano tiene de decidir si lleva a cabo o no una determinada acción según su inteligencia o voluntad. Así mismo se puede también definir a la libertad, como aquella facultad que permite a otras facultades actuar y que está regida por la justicia.

En palabras de Olascaga (2009) la libertad de expresión es la libertad de expresar pensamientos, ideas o creencias a través de la palabra ya sea escrita u oral, la expresión artística, científica, entre otras.

La importancia radica en que el ejercicio pleno de este, es importante en una sociedad democrática permitiendo a los ciudadanos la participación en la toma de decisiones para la construcción de un Estado social de Derecho, tal y como lo define la Constitución Política Nicaragüense, de la misma manera que define en sus artículos 29, 30, 66 y 67 los derechos sobre la libertad de pensamiento, de expresión e información.

El Tribunal Constitucional español, define que la libertad de expresión tiene por objeto la difusión del pensamiento, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del que deben incluirse también las creencias y los juicios de valor.

Carbonell (2004, p.3) señala a la democracia como aquella que supone y exige la participación activa de todos los habitantes adultos del país de que se trate, y para que esa participación no sea meramente testimonial sino efectiva y plena de contenidos, es necesario que exista libertad de expresión, como requisito previo para la generación de un debate público que sea “abierto, desinhibido y robusto”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia ha señalado que el control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios, de ahí parte la mayor tolerancia frente a

afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en el ejercicio de dicho control democrático. (Corte IDH. *Caso Herrera*, Corte IDH. *Caso Palmara Iribarne*, Corte IDH. *Caso Eduardo Kilmer*, Corte IDH *Caso Ivcher Bronstein*).

Es tan importante el vínculo entre la libertad de expresión y la democracia que, según ha explicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el objetivo mismo del artículo 13 de la Convención Americana es el de fortalecer el funcionamiento de sistemas democráticos pluralistas y deliberativos mediante la protección y el fomento de la libre circulación de información, ideas y expresiones de toda índole (Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein*). Principales rasgos del derecho a la libertad de expresión

1.1.1 Sujetos responsables del derecho a la libertad de expresión

El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, señala que la libertad de expresión es un derecho que tiene *toda persona*, en condiciones de igualdad y sin discriminación por ningún motivo, es por ello que la justicia constitucional, establece la existencia de una serie de mecanismos legales a los cuales pueden acudir quienes se ven perjudicados en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Para designar estos mecanismos la doctrina se refiere a ellos como garantías de los derechos. Se trata de garantías judiciales que tutelan una serie de derechos fundamentales, las que necesitan el establecimiento de un puente que pueda reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad y por lo tanto, en palabras de Ferrajoli "posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional" (2001, p. 242).

Ahora bien, se puede hablar de cómo se puede restringir el derecho de libertad de expresión de unos, para proteger los derechos de otros. Es contradictorio restringir los derechos de unos para garantizar el de otros. Pero sin embargo cuando existe un abuso de la libertad de expresión, existen medios para restringirla o reparar el perjuicio cometido, podemos señalar el derecho de rectificación, respuesta y reparaciones que la Corte Interamericana de Derecho Humanos, establece en su Jurisprudencia al imponer un límite que asegura el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema de valores y principios (Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985).

Pues bien como lo ha señalado la Corte, las causales de responsabilidades posteriores por el ejercicio abusivo de este derecho, deben estar expresamente tasadas y previamente fijadas por la ley, éstas tendrán que ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos, la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública, y no debe de modo alguno limitar más allá de lo estrictamente necesario el alcance pleno de la libertad de expresión, y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa (Corte IDH. *Caso Ricardo Canese*; Corte IDH. *Caso “La Última Tentación de Cristo” Olmedo Bustos y otros v. Chile*; Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*).

Los límites a la libertad de expresión no es un tema a abordar en este trabajo de investigación, sin embargo es importante destacar que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene que estar sujeto a restricción, en particular cuando se interfiere con otros derechos garantizados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. (Corte IDH. *Caso Eduardo Kimel*) tal y como se mencionó al inicio de este trabajo y será desarrollado de manera precisa en el capítulo tercero.

1.1.2 La doble dimensión del derecho a la libertad de expresión

En cuanto al contenido que tiene la libertad de expresión, la Corte ha señalado dos dimensiones, el derecho de expresar o de manifestar su propio pensamiento y el derecho a que este no sea arbitrariamente menoscabado. Y por otro lado, el derecho a que nadie puede ser impedido de conocer el pensamiento de otro.

Asimismo podemos hablar de un contenido social, al referirnos al intercambio de ideas que se experimenta a través de la libertad de expresión. Partiendo de esta premisa se puede instituir que el derecho a la libertad de expresión tiene una triple función: pensar, informar y recibir información.

La jurisprudencia interamericana en numerosas oportunidades ha caracterizado al derecho a la libertad de expresión, por ser un derecho que tiene dos dimensiones o una doble dimensión. (Corte IDH. *Caso Eduardo Kimel*. Corte IDH. *Caso López Álvarez*. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el *Caso Herrera Ulloa v. Costa Rica*. Transcritos en la sentencia del 2 de julio de 2004). Corte IDH *Caso Herrera Ulloa*. *Caso Ivcher Bronstein*. Corte IDH. *Caso Ricardo Canese*. Corte IDH. *Caso “La Última Tentación de Cristo”* (Olmedo Bustos y otros v.

Chile).“La Colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana Sobre Derechos Humanos)”. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 noviembre de 1985. CIDH, Informe Anual 1994).

Así pues, al hablar de dimensiones que caracterizan al derecho a la libertad de expresión podemos señalar dos; una dimensión individual y una dimensión colectiva. Ambas dimensiones son igualmente importantes, son interdependientes, y deben garantizarse simultáneamente en forma plena, para dar efectividad total al derecho consagrado en los instrumentos interamericanos, así lo señala la Corte IDH en los casos(Corte IDH. *Caso de Ricardo Canese*. Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein*. Corte IDH. *Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros v. Chile)*.CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el *Caso Herrera Ulloa v. Costa Rica*).

1.1.2.1 Dimensión individual

La dimensión individual consiste en el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones, usando los medios que se elijan. (Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*).

1.1.2.2 Dimensión colectiva

Esta consiste en el derecho de recibir o procurar recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenas y a estar bien informado. Comprende el derecho inseparable a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios (Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*, Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein*, Corte IDH. *Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros v. Chile)*. Corte IDH. *Caso de Ricardo Canese*).

Frente a estas conceptualizaciones el informe de la relatoría en temas de libertad de expresión, explica que la doble dimensión, es un medio para el intercambio de informaciones e ideas entre las personas y para la comunicación masiva entre los seres humanos, que implica tanto el derecho a comunicar a otros el propio punto de vista y las informaciones u opiniones que se quieran, como el derecho de todos a recibir y conocer tales puntos de vista, informaciones, opiniones,

relatos y noticias, libremente y sin interferencias que las distorsionen u obstaculicen. Este es el llamado derecho de acceso a la información pública.

Se puede decir que están importante, el conocimiento de la opinión ajena o la información de que disponen otros, como el derecho a difundir la propia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del Informe de la Relatoría en Temas de Libertad de Expresión señala, que una de las principales consecuencias del deber de garantizar simultáneamente ambas dimensiones es que no se puede menoscabar una de ellas invocando como justificación la preservación de la otra; así, por ejemplo, “no sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor. Como tampoco sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo interés” (2008, p. 102).

Ahora bien, hay marcos normativos en la región que hacen una diferenciación entre las dos dimensiones que posee la libertad de expresión, es decir el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones, usando los medios que se elijan y el derecho a acceso a la información haciendo referencia al derecho de recibir o procurar recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informado, a partir de esto se puede hablar del derecho inseparable a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios

La Constitución Política de Nicaragua señala en el artículo 30, el derecho que tienen los nicaragüenses de expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral o escrita o por cualquier medio, es en este precepto constitucional que se desarrolla la dimensión individual.

En línea con lo anterior, cabe advertir que la dimensión colectiva, es recogida en el artículo 26, inciso 4 de la Constitución Política de Nicaragua, el cual establece que toda persona tiene derecho, a conocer toda información que sobre ella haya registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tiene esa información. Solamente en un país fundado en un Estado social de Derecho, (Artículo 130 de la Constitución Política de

Nicaragua, reformada en el año de 2000) el derecho al acceso a la información pública puede ser utilizado por el ciudadano sin ningún tipo de limitaciones.

Este derecho de acceso a la información pública, es un derecho fundamental reconocido por el ordenamiento jurídico, constituyendo un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y privadas que administren, manejen o reciban recursos públicos, beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas (caso de Nicaragua), a la vez, fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones, sirviéndole de herramienta al ciudadano para que pueda hacer valer sus derechos.

Persigue fines concretos, tales como promover la transparencia en la función pública, combatir la corrupción, ayudar a la participación de los ciudadanos, etc.

Tales fines también se ven plasmados en tratados internacionales y legislaciones de varios países del mundo que buscan mejorar y transparentar el funcionamiento de las instituciones del sistema democrático.

Este precepto constitucional en el caso nicaragüense, es desarrollado en la Ley No. 621, aprobada el 16 de Mayo del 2007 y Publicada en La Gaceta No. 118 del 22 de Junio del 2007, cuyo objetivo es normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente en los documentos, archivos y bases de datos de las entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, así como las entidades privadas que administren, manejen o reciban recursos públicos, beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas. Así mismo establece que la información privada en poder del Estado no es considerada de libre acceso público.

Podemos decir que este derecho implica la facultad que tiene toda persona para acceder a la información pública generada, o en poder de los sujetos obligados conforme a la ley señalada con anterioridad, no obstante hoy en día se habla del *Derecho al Saber*, donde solamente a través del pleno ejercicio, del derecho al acceso a la información se puede ejercer el derecho a la autodeterminación informática, que está íntimamente ligado al derecho a la libertad de expresión.

La Corte Interamericana de Derecho Humanos, ha sostenido reiteradamente que con independencia de que algunas de las violaciones al derecho a la vida, pudieran o no ser castigadas, los familiares de las víctimas tienen el *Derecho de saber*, cuál fue el destino de estos y en sus casos donde se encuentran sus restos. Siendo un dato importante el señalar el Caso CIDH. *Caso Claude*

Reyes, donde se incluye por primera vez, el derecho de acceso a la información dentro del catálogo de derechos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Es decir ambas dimensiones son recogidas y reconocidas por el ordenamiento jurídico nicaragüense de forma individual.

1.2 Libertades fundamentales claramente vinculadas a la libertad de expresión

Cuando hablamos de libertades nos referimos a la capacidad que posee el ser humano de poder obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida, siendo de esta manera responsable de sus actos.

Olascaga (2009) habla del recorrido histórico de la libertad desde Justiniano transcribiendo en el Digesto el concepto y las palabras similares de Florentino: la libertad es la facultad de hacer cada uno lo que le plazca, salvo impedírsela la fuerza o el derecho. Gayo, la consideraba como el mayor de los bienes: “*Libertas omnibus rebus favorabilior est*” (La libertad es la más preciada de las cosas), desde la revolución del siglo XVIII y XIX, la libertad suele estar muy unida a los conceptos de justicia e igualdad.

Así esto, los derechos individuales y las libertades fundamentales han sido clasificadas de diferente manera por los tratadistas de la materia, atendiendo a diversos criterios, aunque en esencia todas las clasificaciones coinciden en cuanto a su identificación. Estas libertades públicas pueden ejercerse en distintas direcciones, siempre en busca de la realización integral del ser humano y de su legítimo desarrollo dentro de la sociedad. Así pues, este derecho comprende varias categorías que están claramente vinculadas a la libertad de expresión.

1.2.1 La libertad individual o física

Collard (1992, p. 57) define a la libertad como “El estado del hombre que no está arrestado, ni detenido, quien goza por lo mismo de la posibilidad de ir y de venir”. Se trata, pues, de una libertad esencial que debe gozar de la protección de las autoridades en un Estado de Derecho.

En esta línea, cabe señalar que la esclavitud es el más grave atentado contra la libertad individual o física, la forma más aberrante de vulnerar este derecho natural. Ella se ha practicado, por desgracia, a través de todos los tiempos y en todas las sociedades. En la época actual, si bien está expresamente prohibida en todas las legislaciones civilizadas, aún se dan formas de esclavitud,

aunque solapadas, como la trata de personas, sobre todo en regiones subdesarrolladas del mundo.

Así pues, el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece su prohibición expresa: “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”. Igual prohibición hace el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, aprobada en 1966.

En línea de lo anterior, es indispensable el ejercicio a la libertad de expresión en el momento de hacer valer los derechos, cuando estos estén siendo vulnerados impidiendo la libertad, independientemente de cuál sea esta.

1.2.2 Las libertades espirituales

Las libertades espirituales, tales como, la libertad de conciencia, la libertad de religión y la libertad de culto, como se verá, también pueden estar sujetas a determinadas limitaciones, por tanto, tampoco pueden considerarse absolutas, a excepción, quizá, solamente la libertad de conciencia.

Las libertades espirituales son las que le permiten al hombre profesar creencias religiosas y exteriorizar su fe a través de las distintas manifestaciones de culto. Ellas han sido reconocidas por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y por la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos, así: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza, nadie será objeto de medidas coercitivas que pueda menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección”.

La libertad de conciencia consiste en la facultad de profesar o no alguna religión, de elegir la religión o creencia que se desee, o de cambiar de religión o creencia. Es una libertad que se ejerce en el fuero interno de la persona y que no requiere de manifestaciones externas, gracias a ella el individuo se reserva el derecho a creer, y, en el primer caso, de creer lo que su conciencia le dicte, sin que pueda ser objeto de ninguna especie de coerción o cortapisa.

Tal vez ésta sea por su naturaleza misma, la única libertad que pueda considerarse como absoluta, ya que como lo he señalado, pertenece al fuero interno de la persona. Sin embargo, puede estar sujeta a presiones externas, derivadas del medio ambiente en que se vive.

De la libertad religiosa se desprende la facultad que tiene toda persona para expresar públicamente o no sus creencias religiosas, cualesquiera que sean, sin que por ello sea molestada o impedida de hacerlo, o sea perseguida, u objeto de discriminación de alguna especie.

El hecho de tener una religión o de no tener ninguna no puede ser causa para establecer diferencias legales o sociales entre las personas. Tampoco se puede obligar a alguien a profesar una religión en la que no cree, o hacer manifestar en público su pertenencia a ella, podemos hablar de esta forma de la libertad de culto. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de intolerancia y discriminación, señaló que la religión puede definirse como:

“...una explicación del sentido de la vida y un modo de vivir con arreglo a él; toda religión tiene por lo menos un credo, un código de conducta y un culto...”.

A partir de este análisis podemos concluir que este tipo de libertades espirituales, están vinculadas a la libertad de expresión, si y solo sí, el individuo decide expresarlas en público, es decir es una decisión personal que no afecta a terceros, siendo este tipo de libertades las únicas a las que se les puede llamar absolutas, ya que no admite restricción o injerencia alguna.

1.2.3. Las libertades sociales

Existen también las llamadas libertades sociales, son aquellas que permiten a las personas y a los grupos establecer relaciones con otros individuos o grupos, con el fin de satisfacer determinadas necesidades vitales, en los campos político, económico, social o cultural. Entre las libertades sociales más destacadas tenemos;

1.2.3.1. La libertad de trabajo

La libertad de trabajo se refiere a la facultad que tiene toda persona de escoger profesión u oficio, de asegurarse la subsistencia para sí misma y para su familia, mediante el ejercicio de cualquier actividad productiva que no sea contraria a la Ley, a la moralidad, a la salubridad o al orden público.

1.2.3.2. La libertad de reunión

La libertad de reunión debe entenderse, como la facultad de poder congregarse varias personas, de manera transitoria y con fines pacíficos y lícitos, sea en recintos públicos o privados. A nadie debe, pues, en principio, impedírsele que se reúna con otros, siempre y cuando la reunión no sea con carácter permanente.

Mirabeau (2009) señala que la libertad de expresión, es una libertad sin la cual otras no pueden ser conquistadas. Todas las libertades señaladas anteriormente se encuentran reconocidas en distintos textos internacionales, entre los cuales podemos citar: la Declaración Francesa de 1789, que en su artículo 11 señala a la libertad “como uno de los preciosos derechos del hombre,” de igual forma está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 18, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en los artículos III y IV, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 18, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 12, la cual establece que “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”, y que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Como normativa complementaria, también se encuentra la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión (1981) y la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (1992).

Esta libertad tampoco es, en modo alguno, absoluta, como se ha señalado en distintas ocasiones, por el contrario, impone deberes y responsabilidades muy grandes y está sujeta a las limitaciones impuestas por la Ley, con el objeto de salvaguardar el orden público, la moralidad y la honra de los ciudadanos, cuando ésta se vea afectada por su utilización abusiva.

1.3. Principales tipos de expresión

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia se ha pronunciado en referencia a los derechos que el artículo 13 de la Convención Americana contempla, tales como: el derecho a hablar (Corte IDH. *Caso López Álvarez*) en este caso se le prohibió a la víctima hablar el idioma de su etnia, el derecho a escribir, el derecho a expresar en forma escrita información (Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*), el derecho a difundir expresiones habladas (Corte IDH. *Caso Palamara*), el derecho a la expresión artística o simbólica, el buscar, recibir, acceder a informaciones de toda índole, el derecho de tener acceso a información sobre uno mismo en bases de datos públicas o privadas y el derecho de poseer información escrita, transportarla o distribuirla.

De la misma forma que están protegidos los diferentes tipos de expresión, así están protegidas todas las formas de discurso, este derecho protege no solo los discursos que son favorables sino también los que ofenden, chocan, son ingratos y perturban al Estado. (Informe Anual 1994 y 2008)

Los principales tipos de expresión que han sido objeto de pronunciamientos por parte de la Comisión y la Corte Interamericanas son los siguientes (Informe Anual, 2008). Encontramos como un tipo de expresión y que a juicio de la Corte es el más importante el *derecho a hablar* percibido como la posibilidad de expresar los pensamientos, entendiéndose este como cualquier tipo de manifestación del discernimiento humano., este derecho es la base fundamental del derecho a la libertad de expresión, es decir, sin ideas, sin información y sin pensamientos no se puede expresar a través del habla. La libertad de expresión que no es más que la divulgación de la libertad ideológica y de pensamiento.

Es indiscutible que antes de expresarse se tiene que tener previamente un pensamiento e ideas, de ahí el debate teórico de que sin libertad de conciencia y de pensamiento no puede existir libertad de expresión. (Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*. Corte IDH. *Caso de Ricardo Canese*. Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein*. Corte IDH. *Caso de “La Última Tentación de Cristo”* (Olmedo Bustos y otros v. Chile). Corte IDH. “La Colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana Sobre Derechos Humanos)”. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985.

Ahora bien el derecho a hablar, su complemento necesario es el ***derecho a recurrir a un idioma***, según la elección en la expresión de su pensamiento. (Corte IDH. *Caso López Álvarez*).

Como un tercer tipo de expresión tenemos *el derecho a escribir*, esto es, el derecho a expresar en forma escrita o impresa los pensamientos, ideas, información u opiniones, en el idioma que se elija para hacerlo, independientemente de la forma elegida para hacerlo ya sea a través de libros, artículos periodísticos etc. La jurisprudencia de la Corte es amplia en ese sentido. (Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*. Corte IDH. *Caso de Ricardo Canese*. Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein*. Corte IDH. *Caso de “La Última Tentación de Cristo”* (Olmedo Bustos y otros v. Chile).

El cuarto tipo o manera de expresarse, es *el derecho a difundir las expresiones* habladas o escritas de pensamientos, informaciones, ideas u opiniones, por los medios de difusión que se elija, para

comunicarlas al mayor número posible de destinatarios. De igual forma en este sentido la Corte tiene amplia jurisprudencia. (Corte IDH. *Caso Palamara Iribarne*. Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*. Corte IDH. *Caso de Ricardo Canese*. Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein*. Corte IDH. *Caso de “La Última Tentación de Cristo”* (Olmedo Bustos y otros v. Chile). Corte IDH. “*La Colegiación obligatoria de periodistas* (Arts. 13 y 29 Convención Americana Sobre Derechos Humanos)”. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985).

En este tipo de expresión pone de manifiesto la dimensión colectiva, que es el derecho de que el pensamiento, la información y las ideas sean difundidos por cualquier medio de información y el derecho a recibirlas socialmente como medio de intercambio de ideas, para la comunicación masiva de los seres humanos. (Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*).

Siendo el Estado el ente encargado de que esta dimensión sea respetada y garantizada a través de no vulnerar y restringir este derecho previamente, sino con responsabilidades ulteriores al mismo. (Corte IDH. *Caso Palamara Iribarne*. Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*. Corte IDH. *Caso de Ricardo Canese*. *Caso Ivcher Bronstein*. Corte IDH. *Caso de “La Última Tentación de Cristo”* (Olmedo Bustos y otros v. Chile). “*La Colegiación obligatoria de periodistas* (Arts. 13 y 29 Convención Americana Sobre Derechos Humanos)”. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985.)

Sobre la misma línea de lo anterior, la Convención Americana establece que la libertad de expresión comprende el derecho a difundir informaciones e ideas “por cualquier (...) procedimiento”. Esto determina que la expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, y en ese sentido cualquier limitación de los medios y posibilidades de difusión de la expresión es, directamente y en la misma medida, una afectación de la libertad de expresión. (Corte IDH. *Caso López Álvarez*. Corte IDH. *Caso Palamara Iribarne*. Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*. Corte IDH. *Caso de Ricardo Canese*. Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein*. Corte IDH. *Caso de “La Última Tentación de Cristo”* (Olmedo Bustos y otros v. Chile).

El derecho a la expresión artística o simbólica, a la difusión de la expresión artística, y al acceso al arte, en todas sus formas. No basta con permitir que se escriban las ideas y opiniones, se necesita la protección para no restringir su difusión, de tal manera que se puede utilizar cualquier mecanismo para difundirla. (Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*. Corte IDH. *Caso de Ricardo Canese*. Corte IDH. *Caso*

Ivcher Bronstein. Corte IDH. *Caso de “La Última Tentación de Cristo”* (Olmedo Bustos y otros v. Chile).

El derecho a buscar, a recibir y a acceder a expresiones, ideas, opiniones e información de toda índole, en su jurisprudencia la Corte ha señalado que además de este tipo de expresión se faculta también a sus titulares a buscar y recibir todo tipo de información que esté en manos del Estado, esto es, el llamado *derecho de acceso a la información pública* regulado en la legislación Nicaragüense, analizado con anterioridad, siendo este el derecho de tener acceso a la información sobre sí mismo, contenida en bases de datos o registros públicos o privados, con el objetivo de actualizarla, rectificarla o modificarla. (Corte IDH. *Caso Claude Reyes y otros*).

Como último pero no menos importante está *el derecho a poseer información escrita o en cualquier otro medio, a transportar dicha información, y a distribuirla*. Los organismos interamericanos han protegido esta manifestación de la libertad de expresión, por ejemplo, en casos de posesión de periódicos o medios impresos para la distribución uso personal, de posesión, transporte, envío y recepción de libros.

2. Sistema normativo de la libertad de expresión en el sistema interamericano

Es importante señalar que en el régimen normativo del sistema interamericano de protección de los derechos humanos es probablemente, el sistema internacional que da mayor alcance y envuelve de mejores garantías a la libertad de pensamiento y expresión. (Informe, 2008).

La jurisprudencia de la Corte, ha evidenciado el altísimo valor que la Convención le da a la libertad de expresión, la comparación entre el artículo 13 y las disposiciones relevantes de la Convención Europea (artículo 10) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19) demuestra que las garantías de la libertad de expresión contenidas en la Convención Americana *fueron diseñadas para ser las más generosas y para reducir al mínimo las restricciones a la libre expresión*. (La Colegiación obligatoria de periodistas. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985).

En línea con lo anterior, cabe advertir que existen tres instrumentos regionales de especial trascendencia en el tema de la protección a la libertad de expresión, como lo son la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo IV, y la Carta Democrática Interamericana en su

artículo 43, las tres ofrecen un conjunto de garantías fortalecidas que no parece tener cotejo con ningún sistema de protección de derechos humanos.

2.1 La Convención Americana sobre Derechos Humanos

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, entra en vigencia el 18 de julio de 1978, siendo un paso fundamental para el fortalecimiento del sistema de protección de derechos humanos en la región. Así, a partir de la entrada en vigencia se le da mayor solidez al trabajo realizado por la Comisión a través de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tal y como lo señala su preámbulo, su propósito es la consolidación dentro de la región de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, establece la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades en ella reconocidos, así como su deber de adoptar las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para hacer efectivo el goce de tales derechos, en ella se delimitan los derechos y libertades protegidos, principalmente, los derechos civiles y políticos.

Ahora bien el artículo 13 expresa, que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. En él se hace mención de las dimensiones individuales y colectiva que tiene la libertad de expresión, no existiendo la censura previa, sino las responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. (Corte IDH. *Caso Olmedo Bustos*).

Sigue señalando el artículo 13, que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

En este artículo, se establecen límites claramente señalados los cuales son los espectáculos públicos que pueden ser sometidos por la ley a censura previa, con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos, para la protección moral de la infancia y la adolescencia, así como la prohibición

por la ley de toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar, contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, incluso los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

La Corte ha interpretado que este artículo es de suma importancia, ya que se le otorga al ejercicio de este derecho una gran generosidad y una reducción mínima a las restricciones a la libre circulación de información, opiniones e ideas, argumento utilizado por la Corte, en reiteradas oportunidades.

En referencia al artículo 13 de la Convención Americana, la Corte ha señalado que “marco jurídico interamericano,” otorga un valor alto a la libertad de expresión porque se basa en un concepto amplio de la autonomía y la dignidad de las personas, y porque tiene en cuenta tanto el valor instrumental de la libertad de expresión para el ejercicio de los demás derechos fundamentales, como su función esencial dentro de los regímenes democráticos, tema que fue señalado en el capítulo primero de este trabajo.

Para Huerta (2003) la relación de objetivos legítimos previstos en la Convención Americana que justifican limitar la libertad de expresión, es considerada como una lista cerrada, por lo que no cabe fundamentar una restricción a su ejercicio en otros objetivos que no sean los mencionados expresamente en este tratado. Cualquier restricción que no se base en alguno de estos objetivos resulta incompatible con el ejercicio de este derecho.

2.2. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

La Declaración Americana aprobada, en mayo de 1948, es el primer instrumento internacional de su tipo, ya que fue adoptada antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el seno de las Naciones Unidas en diciembre del mismo año.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado señalando que a pesar de ser adoptada como una declaración y no como un tratado, en la actualidad la Declaración Americana constituye una fuente de obligaciones internacionales para los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Es importante destacar que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo IV, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio, siendo en la región uno de los

tres instrumentos de mayor importancia en el tema de la protección del derecho a la libertad de expresión.

2.3. La Carta Democrática Interamericana

Fue aprobada el 11 de septiembre de 2001, en sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Perú. Su objetivo fundamental es la preservación de las sociedades democráticas, a través del mantenimiento del orden democrático de los Estados miembros de la OEA.

En su artículo 4 señala, que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. (Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein*. Corte IDH. *Caso de “La Última Tentación de Cristo”* (Olmedo Bustos y otros v. Chile). Corte IDH. *Caso Ríos y otros*).

En este mismo sentido, la jurisprudencia ha destacado que la función democrática de la libertad de expresión, la convierte en una condición necesaria para prevenir el arraigo de sistemas autoritarios y para facilitar la autodeterminación personal y colectiva (Informe 2008).

A pesar de ser tres los instrumentos internacionales de importancia en el tema de la protección a la libertad de expresión, y que estos ofrecen un conjunto de garantías brindado de esta manera protección plena al derecho de la libertad de expresión, es de relevancia señalar que la Corte, no utiliza otro parámetro para medir la violación a este derecho únicamente el artículo 13 de la Convención y su interpretación es básica.

3. La jurisprudencia en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referidas al derecho de la libertad de expresión

3.1 Alcances de las sentencias de la CIDH referidas a la violación al derecho a la libertad de expresión

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es escasa en comparación con la aportada por el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, en buena medida debido a los pocos casos iniciados frente a su jurisdicción, lo que supone un marco de referencia reducido en el ámbito americano en temas de libertad de expresión.

Sin embargo hoy en día ya se puede hablar de jurisprudencia de la Corte en materia de libertad de expresión ya que se cuenta con diez casos resueltos, es a partir del año 2001, cuando se empieza a decidir sobre los reclamos de víctimas concretas que consideraban vulnerado su derecho a expresarse libremente y por ello, como último recurso, acudieron al sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

La posición jurisprudencial de la Corte plasmada a través de cada una de sus sentencias, será el punto de análisis de este capítulo, sus contenidos y alcances, así como las ponderaciones que se realizan en cada una de ellas.

Así pues, nuestro estudio se centrará en los casos contenciosos sometidos a la Corte, en los que algunos de los Estados que adoptaron la Convención han sido acusados por la violación de un derecho allí previsto.

Las sentencias de fondo que la Corte ha dictado relacionadas con la violación al derecho a la libertad de expresión, son las pronunciadas en los siguientes casos: *Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs. Chile)*. Sentencia de 5 de febrero de 2001; *“Caso Ivcher Bronstein vs. Perú”*. Sentencia de 6 de febrero de 2001; *“Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica”*. Sentencia de 2 de julio de 2004; *“Caso Canese vs. Paraguay”*. Sentencia de 31 de agosto de 2004; *“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”*. Sentencia de 22 de noviembre de 2005; *“Caso Kimel vs. Argentina”*. Sentencia de 2 de mayo de 2008. *“Caso Perozo y otros vs Venezuela”* Sentencia de 28 de enero 2009; *“Caso. Uson Ramírez vs Venezuela”*. Sentencia del 20 de noviembre 2009; *“Caso Tristán Donoso vs Panamá”* Sentencia del 27 de enero 2009; *“Caso Ríos y otros vs Venezuela”*. Sentencia del 28 de enero 2009.

En todas estas sentencias se ha declarado, entre otras cosas, la existencia de violaciones a la libertad de expresión y de pensamiento, derechos protegidos por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Es importante destacar lo que señala Buerghenthal (1994) en cuanto a que cada vez más las Cortes nacionales toma en cuenta la jurisprudencia de los tribunales internacionales, de manera que esto, evita que en el momento de tomar decisiones éstas contradigan o violen las obligaciones internacionales de cada país, o bien para adecuar su derecho interno a las normas legales internacionales emergentes.

Esto es debido señala Buergenthal (1994) a dos circunstancias que se relacionan entre sí, la primera al aumento de tribunales internacionales permanentes y la otra es que estos tribunales tienen competencia para recibir demandas presentadas por particulares.

Considero necesario apuntar que hoy en día se argumenta que el derecho interno y las Cortes internas ya no tienen la última palabra, a la hora de decidir temas de derechos humanos, por ende se puede argumentar que la jurisprudencia internacional cada vez mas influye en los resultados de los juicios internos.

Para tales efectos el artículo 63 de la Convención señala las sanciones que puede contener la parte dispositiva de la sentencia. En consecuencia, podrá disponer: *a)* Se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados. *b)* Se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la violación. *c)* El pago de una justa indemnización.

Rodríguez (1994), señala que una sentencia condenatoria dictada por la Corte contra un Estado, en sí misma puede constituir una forma de reparación y satisfacción moral de significación e importancia para los familiares de las víctimas.(Corte IDH, *Caso “La última tentación de Cristo” Olmedo Bustos y otros vs. Chile*; Corte IDH, *Caso Baruch Ivcher Bronstein*”; Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*; Corte IDH. *Caso Ricardo Canese*; Corte IDH. *Caso Palamara Iribarne*; Corte IDH. *Caso Kime*; Corte IDH. *Caso Perozo*; Corte IDH. *Caso Uson Ramírez*; Corte IDH. *Caso Tristán Donoso*; Corte IDH, *Caso Ríos y otros*). Se pretende que con el establecimiento de una justa indemnización, el fallo de la Corte vaya más allá de una sanción de tipo moral, por ello se establece en el artículo 68. 2 de la Convención que el fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado

Rodríguez (1994, p. 98), citando a Nieto Navas, afirma que la indemnización garantiza que los fallos emitidos por la Corte no se queden en meras condenas morales, sin embargo los fallos de la Corte radican en el compromiso de los Estados Partes de cumplir con las decisiones tomadas por éstas, siendo más que un compromiso, es una obligación de respetar los acuerdos ratificados, por cada uno de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

3.2 Coherencia jurisprudencial en los caso contenciosos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión

Es necesario destacar la importancia que tienen la Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, opinión emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en referencia a la colegiación obligatoria de periodistas, su contenido hace referencia a los estándares democráticos de la libertad de expresión y las responsabilidades ulteriores entre otros temas, cabe mencionar que hasta hoy están siendo utilizada por la Corte, para resolver los casos en materia de libertad de expresión.

Ahora bien el tema de análisis, son las relaciones que ha venido teniendo la jurisprudencia de la Corte, a los largo de estos años, su inicio data como fue mencionado con anterioridad, a partir de 1998, en donde solamente se contaba con dos casos sobre libertad de expresión, el primero y ya mencionado, es la Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985: La Colegiación Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), y el segundo, es la Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986: Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (artículos. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). (Informe, 2008).

A partir del año 2001, la Corte inicia resolviendo los temas en relación a la violación del artículo 13 de la Convención, siendo un punto de coincidencia en más de cuatro sentencias lo referido a la relación con el orden público en una sociedad democrática, en su jurisprudencia la Corte ha hecho énfasis en la importancia que tiene el respeto al derecho a la libertad de expresión en los siguientes puntos:

La libertad de expresión en las sociedades democráticas y la prevalencia del orden público, conceptualizándola como la garante de la mayor circulación de noticias, ideas y opiniones, siendo la libertad de expresión la piedra angular para la existencia de las sociedades democráticas (Corte IDH. *Caso “La última tentación de Cristo” Olmedo Bustos y otros vs. Chile*; Corte IDH. *Caso Baruch Ivcher Bronstein vs. Perú*; Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*; Corte IDH. *Caso Ricardo Canese*).

Señala la Corte que el control democrático por parte de la sociedad, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve responsabilidades, es decir sin una efectiva libertad de expresión materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se comienzan a tonar inoperantes y en definitiva se crea un campo fértil para que sistemas

autoritarios se arraiguen en la sociedad (Corte IDH. *Caso Peralta y otros*; Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*; Corte IDH. *Caso Ricardo Canese*).

De ahí la importancia de la libertad de expresión para la construcción y el fortalecimiento de una sociedad democrática. El Estado debe minimizar las restricciones a la información y equilibrar, en la medida de lo posible la participación de las distintas corrientes en el debate público, impulsado el pluralismo informativo (Corte IDH. *Caso Peralta y otros*).

De la misma manera expresa la jurisprudencia de la Corte que existe coincidencia entre los diferentes sistemas regionales de protección a los derechos humanos y el universal, en cuanto al papel esencial que juega la libertad de expresión en la consolidación y dinámica de una sociedad democrática.

La opinión consultiva deja claramente señalada que la libertad de expresión es imprescindible para la vida en democracia, afirmando que es también una *conditio sine qua non* para los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, para quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, este suficientemente informada. Por ende es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre.

Otro de los puntos que la Corte ha señalado en varias de sus sentencias, es que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, pudiendo ser objeto de restricciones lo señala el artículo 13.4 y el artículo 13.2 de la Convención establecen las restricciones que se manifiestan a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho, pero también señalan los mencionados artículos, que es necesario que se cumplan tres requisitos; el primero de ellos es que estas prohibiciones estén expresamente fijadas por la ley, el segundo que estas restricciones deben estar destinadas a proteger ya sean los derechos o la reputación de los demás, y tercero que tiene que ser necesarias en una sociedad democrática (Corte IDH. *Caso Peralta y otros*; Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*; Corte IDH. *Caso Ricardo Canese*, Corte IDH. *Caso Tristán Donoso*; Corte IDH. *Caso Kimel*, Corte IDH. *Caso Palamara Iribarne*).

Es por ello, que cuando el derecho a la libertad de expresión entra en contradicción con otros posibles derechos o valores, es necesario proceder a una ponderación de los mismos, aunque esta situación es decir la restricción a la libertad de expresión puede ser o no violatorio de la

Convención, según se ajunte o no a los términos en que dichas restricciones están autorizadas (Corte IDH. *Caso Canese* .Corte IDH. *Caso Palamara Iribarne*; Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*).

La Corte a estudiado la legalidad de los límites y restricciones desde el aspecto del bien común y el orden público, por ende se puede afirmar que los límites a la libertad de expresión, es uno de los temas más complejos en el debate democrático constitucional contemporáneo, por tratarse de un derecho fundamental muy cuestionado ya que él por si mismo constituye un límite a los poderes públicos y privados, ya que el Estado es el que históricamente ha sido el constante violador potencial de las libertades.

De ninguna manera podría invocarse el orden público o el bien común (fundamento de limitaciones a los derechos humanos) como medios para suprimir un derecho garantizado por la convención o para desnaturalizar o privarlo de contenido real. Esos conceptos deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las “justas exigencias” de “una sociedad democrática” que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención (Corte IDH. *Caso Ricardo Canese*; Corte IDH. *Caso Palamara Iribarne*; Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*; Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein*).

El ejercicio de cada derecho fundamental tiene que hacerse con respeto y salvaguarda de los demás derechos fundamentales, Corte IDH. *Caso Donoso*. La necesidad de proteger los derechos a la honra y la reputación, así como otros derechos que pudieran verse afectados por el ejercicio abusivo de la libertad de expresión, requieren la debida observancia de los límites fijados a este respecto por la propia Convención.

La Corte ha reiterado que se prohíbe la censura previa, estableciendo las responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa (Corte IDH. *Caso Canese*; Corte IDH. *Caso Palamara Iribarne*; Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*).

Así mismo, se señala que el Estado debe de minimizar las restricciones a la información y equilibrar en la medida posible la participación de las distintas corrientes en el debate público, impulsando el pluralismo informativo (Corte IDH. *Caso Perozo y otros*. Podemos señalar el *Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs. Chile)*. Sentencia de 5 de febrero de 2001).

Señala la Corte, que un Estado no es responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida por particulares. El carácter *erga omnes* de las obligaciones convencionales de garantía, no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto de particulares. Debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía, considerando la previsibilidad de un riesgo real e inmediato (Corte IDH. *Caso Perozo y otros*. Corte IDH. *Caso Ríos y otros*).

El ejercicio efectivo de la libertad de expresión, implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida por actos normativos o administrativos del Estado, o por condiciones de facto que coloquen directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales o de particulares.

En el marco de sus obligaciones de garantía de los derechos reconocidos en la Convención, el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad y ha de adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación, así como, en su caso, investigar hechos que los perjudiquen. (Corte IDH. *Caso Perozo y otros*).

Por ello, el definir cuáles son las expresiones que deben ser sancionadas, podría llegar a hacer un problema en cualquier democracia. Analizar la fundamentación que presupone, su ¿Por qué? y ¿Para qué?, tal y como lo señala Peces Barba (1991) siendo de suma importancia su fundamentación como derechos necesarios para el desarrollo integral de hombre.

De la misma manera el tema de *la participación política*, ha tenido preeminencia en las últimas sentencias emitidas por la Corte, se habla de libertad de expresión en los procesos electorales, a fin de garantizar la transparencia en los mismos y la participación de toda la sociedad.

Es indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión, en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades estatales que gobernarán un Estado. La formación de la voluntad colectiva mediante el ejercicio del sufragio individual se nutre de las diferentes opciones que presenta los partidos políticos a través de candidatos que los representan, el debate democrático implica que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información. Es preciso que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos,

así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones de manera que los electores puedan formar criterio para votar, En este sentido el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de expresión se encuentran íntimamente ligados y fortalecidos entre sí (Corte IDH. *Caso Canese*).

Las declaraciones emitidas por los ciudadanos en algunos diarios permiten el ejercicio de la libertad de expresión, en sus dos dimensiones, por un lado permiten difundir las información con que el interesado contaba respecto de los candidatos que participan en un contienda electoral y por otro lado fomenta el intercambio de información con los electores, brindándoles mayores elementos para la formación de sus criterio y la toma de decisiones en relación con la elección de los candidatos (Corte IDH. *Caso Canese*).

Ahora bien, en el marco de una campaña electoral, la libertad de expresión es clave fundamental para el debate durante el proceso electoral, herramienta esencial para el fortalecimiento de la opinión de los demás, es decir de los electores, la libertad de expresión en estos casos se transforma en una plataforma política y un derecho que tiene los candidatos a divulgar sus planes de gobiernos, esto le brinda la oportunidad a la población de conocer a las futuras autoridades.

Ahora bien es de mucha importancia para el análisis de este capítulo el señalar, el papel que juegan *los medios de comunicación social como instrumentos fundamentales de la libertad de expresión*, ya que existe una relación o vinculación entre la libertad de expresión en general y el desempeño de la profesión periodística de manera particular, y es a partir de esto que el periodismo independientemente de sus particularidades es primordial para el análisis y tutela de la libertad de expresión, la Corte hace referencia a la importancia de los medios de comunicación social para la preservación de la democracia, para ellos es importante referirse al concepto que tiene la función social que la Corte ha desarrollado en su Jurisprudencia.

Señala la Corte en el *Caso Canese y Herrera Ulloa*, el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento, y por esa razón , no se puede concebir meramente como la prestación de un servicio al público, a través de la aplicación de conocimientos o capacitación, adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional, como podría suceder con otras profesiones pues está vinculado con la libertad de expresión, que es inherente al ser humano.

Continúa expresando la Corte en los casos señalados con anterioridad, que la profesión de periodistas, implica precisamente buscar, recibir y difundir información. El ejercicio del periodismo por tanto requiere que una persona se involucre en actividades que están definidas o incluidas en la libertad de expresión garantizada en la Convención.

Así mismo el ejercicio del periodismo no puede ser diferenciado de la libertad de expresión; por el contrario ambas cosas están evidentemente aplicadas, pues el periodista profesional, no es, ni puede ser otra cosa, que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. Además la consideración de ambas cuestiones como actividades distintas podrían conducir a la conclusión de que las garantías contenidas en el artículo 13 no son aplicables a periodistas profesionales.

De la misma manera la Corte se ha ocupado en analizar la responsabilidad de los periodistas y los medios de comunicación, analizando. En la Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. La Colegiación Obligatoria de Periodistas, señala que es perfectamente concebible, el establecer un estatuto que proteja la libertad e independencia de todos aquellos que ejerzan el periodismo, sin necesidad de dejar ese ejercicio solamente a un grupo restringido de la comunidad. De la misma forma es fundamental que los periodistas gocen de protección y de la independencia necesaria para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos los que mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que esta goce de plena libertad.

Los medios de comunicación, como instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de expresión deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan (Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa*).

II. Conclusiones

A pesar de ser tres los instrumentos internacionales de importancia en el tema de la protección a la libertad de expresión y que estos ofrecen un conjunto de garantías, brindando de esta manera protección plena al derecho de la libertad de expresión, la Corte no tiene otro parámetro establecido para medir la violación a este derecho, solamente el artículo 13 de la Convención, ahora bien según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la libertad de expresión es lo que el artículo 13 de la Convención dice que es.

La interpretación que realiza la Corte es elemental, y esto se demuestra a lo largo de este estudio, ya que básicamente su jurisprudencia se sustenta en dos pilares fundamentales como lo son los estándares democráticos y los estándares de las dos dimensiones.

Cada vez más las Cortes nacionales toman en cuenta la jurisprudencia de los tribunales internacionales, de manera que esto, evita que en el momento de tomar decisiones no contradigan o violen las obligaciones internacionales de cada país, también es utilizada para la adecuación de su derecho interno a las normas legales internacionales, ya sea por obligaciones adquiridas previamente o por adecuaciones emergentes. Es decir los instrumentos internacionales son vinculantes para los Estados miembros y por ende, la jurisprudencia también es vinculante, pudiendo servir como punto de partida de exigencia a nuestros legisladores y judiciales.

Del análisis realizado, se puede concluir que su jurisprudencia es coherente en todas sus sentencias, a pesar de que los casos contenciosos sometidos a su jurisdicción y resueltos han sido sobre temas diversos, no existen tres sentencias o más referidas a un mismo problema; Sólo en dos de las diez sentencias revisadas se puede apreciar que la Corte ha señalado que la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos violatorios cometidos por terceros, que en principio deberían serles atribuibles.

La Corte también ha señalado, que un Estado no es responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida por particulares. El carácter *erga omnes* de las obligaciones convencionales de garantía, no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto de particulares.

Debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía, considerando la previsibilidad de un riesgo real e inmediato. Por las razones señaladas con anterioridad es que la Corte se pronuncia y alega que la mayoría de hechos alegados en las demandas como violatorios del artículo 13, habrían sido cometidos por particulares, en perjuicio de periodistas y miembros de los equipos reporteriles, así como de los bienes y sede televisivos. La interpretación que hace la Corte en referencia al incumplimiento que el Estado realiza por acción u omisión de sus agentes que se encuentren en posición de garantes de derechos humanos, es

contradictoria ya que al final sanciona al Estado por omisión y argumenta que la obligación es *erga omnes*.

Siendo la Corte la máxima autoridad de aplicación de las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, ella establece cuál es el exacto alcance que tienen los derechos y libertades reconocidos y cuáles son los requisitos que los Estados deben cumplir para que estos sean respetados y garantizados. Sin embargo en el caso de los alcances que tienen los derechos, es decir la interpretación que realiza la Corte sobre algunos temas en particular se vuelve demasiado restrictiva, tal es el caso de las responsabilidades ulteriores.

Hasta el momento la Corte no ha resuelto sobre algunos temas relacionados respecto, al derecho de la libertad de expresión, que van más allá de los temas analizados en esta investigación, ejemplo de ello podríamos hablar de la prohibición que se le realiza a la protesta social, por mencionar uno, su avance jurisprudencial consecuencia de los diversos casos sometidos a su conocimiento únicamente, quedando cuestiones o problemáticas aun sin desarrollar, esto demuestra que sólo es posible identificar tendencias jurisprudenciales si se cuenta con un importante conjunto de controversias sobre un derecho fundamental.

La Corte ha establecido importantes lineamientos sobre las restricciones a la libertad de expresión, siendo en su mayoría, como se señala con anterioridad los límites a ésta, logrando ser definidos como toda reducción de algunos de los elementos jurídicos que conforman su contenido, sin embargo es importante considerar a la Ley en su sentido formal, como la fuente autorizada para establecer una restricción a los derechos fundamentales en cada Estado, límites que tiene que ser establecidos previamente, garantizando de esta manera la consolidación de un sistema político basado en la pluralidad de ideas, y la activa participación ciudadana en los asuntos públicos.

Por lo tanto, el ejercicio de la libertad de expresión sin límites establecidos, ocasiona problemas y por lo tanto es necesario que el derecho constitucional pondere el ejercicio de esta libertad.

En este contexto, un desafío básico consiste en la creación de conciencia a la ciudadanía de la importancia de expresarse responsablemente, generando un espacio de reflexión crítica para los actores comprometidos con desarrollo del Estado social de Derecho.

Ahora bien los límites a la libertad de expresión, es uno de los temas más complejos en el debate democrático constitucional contemporáneo, por tratarse de un derecho fundamental muy cuestionado, ya que por sí mismo constituye un límite a los poderes públicos y privados, puesto que el Estado es el que históricamente ha sido el constante violador potencial de las libertades.

Podría llegar a ser un problema en cualquier democracia, el hecho de poder definir cuáles son las expresiones que deben ser sancionadas. Estos límites en el sistema jurídico nicaragüense son en términos vagos, confusos, ambiguos e imprecisos.

Lo que si se encuentran claramente definidas, como se ha mencionado anteriormente a nivel constitucional son las dos dimensiones del derecho a la libertad de expresión, es decir el derecho de expresarse, y el derecho de recibir información, derechos que el ordenamiento jurídico nicaragüense los regula de forma separada, considerando a esta regulación como la más apropiada ya que se trata de dos bienes jurídicos distintos y por ende se tiene que dar distinto tratamiento en su regulación y protección.

Ahora bien la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, que hace las veces de un tribunal constitucional, no se ha pronunciado en referencia a estos dos derechos, (de libertad de expresión y derecho de acceso a la información), ni a la ponderación del derecho fundamental a la libertad de expresión con otro derecho, ya que no existe ninguna sentencia, sobre la violación del derecho a la libertad de expresión que haya emitido este supremo tribunal, de forma tal que existe deficiencia jurídica sustantiva en este tema, cuando exista alguna sentencia, será necesario tomar en cuenta las obligaciones internacionales que Nicaragua ha ratificado al ser suscriptora de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

III. Lista de referencias bibliográficas

- Bertoni, A. (2008). *Libertad de expresión en Venezuela*. Caracas: Editorial La Paz.
- Bianchi, T. (1997). *El Derecho a la libre expresión: análisis de fallos nacionales y extranjeros*. La Plata: Librería Editor Platense.
- Buergenthal, T. (1994). *Manual de derecho internacional público*. México: Fondo de cultura Económica.
- Contreras, A. (1990). *La protección internacional del derecho de expresión*. México: s. e.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (2008). *Informe anual de la comisión interamericana de derechos humanos 2008*, volumen III, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (1994). *Informe anual de la comisión interamericana de derechos humanos 1994*, volumen I, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
- Carbonell, M. (2004). *Notas sobre la libertad de expresión*. México: s. e.
- Díaz, E. (1998). *Estado de derecho y sociedad democrática*. Bogotá: Águila.
- Ferrajoli, L. (2001). *Los derechos fundamentales en la teoría del derecho*. Madrid: Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello.
- Grossman, C. (2000). La Libertad de Expresión en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, En *The 2000 Goowin Seminar International Human Rights in the 21th Century: The role of the development, reconciliation and democracy in securing world peace*.
- García, S. (2007). *La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. México: Corte Interamericana de Derechos Humanos

Huerta, L. (2003). *Libertad de expresión: fundamentos y límites a su ejercicio*. México: Editorial Fabián D. Placido.

Luna, I. (2009). *Régimen jurídico de la libertad de expresión en el Siglo XIX*. México: UNAM.

Mirabeau (2009). *Sobre la libertad de prensa*. México: Archivero-bibliotecario de la APM.

Madrazo, L. (2008). *Los límites a la libertad de expresión: comentarios a las sentencias SUP-RAP-31/2006 y SUP-RAP-34/2006 del TEPJF*. México, D.F: Tribunal Electoral del Poder Judicial.

Nieto, R. (1994). *La Corte y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos*. San José: Corte IDH.

Orozco y Villa (2005). *Los límites a la libertad de expresión en México*. México: Porrúa.

Olascoaga, J. (2009). El principio de libertad de expresión e información en un caso concreto. En *Revista de Derecho* (4), Universidad de Montevideo, Uruguay.

Peces Barba, G. (1996). *Derechos Fundamentales (4a. ed.)*. Madrid: Universidad Complutense S.A.

Jurisprudencia Internacional

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: CIDH

SCIDHOC-5/85 de 13 de noviembre

SCIDH73/2001 de 5 de febrero

SCIDH 74/2001 de 6 de febrero

SCIDH107/2004 de 2 de julio

SCIDH111/2004 de 31 de agosto

SCIDH13/2005 de 22 de noviembre

SCIDH177/2008 de 2 de mayo

SCIDH193/2009 de 27 de enero

SCIDH195/2009 de 28 de enero

SCIDH194/2009 de 28 de enero

SCIDH 207/2009 de 20 de noviembre

Sentencia Tribunal Constitucional Español: STC

SCT 6/1988 de 21 de enero

Sentencia de la Suprema Corte de los Estado Unidos de América: SUP
SUP-RAP, 31/2006, de 23 de junio

Instrumentos Jurídicos Interamericano de Protección de los Derechos Humanos

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
- Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José
- Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la tortura
- Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
- Carta Democrática Interamericana
- Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. (1992).

36

Instrumentos Jurídicos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos

- Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
- Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, Roma, 4 de noviembre de 1950.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

Leyes

Ley No. 621, Ley de acceso a la información pública. Publicada en La Gaceta No. 118 del 22 de Junio del 2007.

Constitución Política de la República de Nicaragua, (1987). Edición del Poder Legislativo de la República de Nicaragua.